

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
CENTRO JUDICIAL CAPITAL
JUZGADO DEL TRABAJO VI

ACTUACIONES N°: 2950/09



H103063809469

**JUICIO: SANTILLAN ANTONIA DEL VALLE c/ CAJA POPULAR DE AHORROS
DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ Z- DAÑOS Y PERJUICIOS 2950/09**

San Miguel de Tucumán, 29 de junio de 2022

AUTOS Y VISTOS: Vienen los autos del título "SANTILLAN ANTONIA DEL VALLE c/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ Z- DAÑOS Y PERJUICIOS" los que se tramitan por ante este Juzgado del Trabajo de Primera Instancia de la VI Nominación, para resolver Caducidad, de cuyo estudio

RESULTA

Por escrito de fecha 29/12/2011, el letrado Pedro Sánchez, en su carácter de apoderado de Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, adjuntó copia del escrito de planteo de caducidad de instancia interpuesto en fecha 07/09/2015, a efectos de que se notifique del mismo a la actora. Mediante dicho escrito, la demandada a través del apoderado Juan Facundo Masaguer, solicitó que se declare la caducidad de instancia de los presentes autos en razón de que no existió impulso procesal alguno desde el 26/06/2014, fecha en la que se dispone el traslado de la pericial médica a las partes, conforme al art. 40 CPL.

En fecha 03/02/2022 se notificó a la actora mediante cedula en los estrados del juzgado los decretos de fecha 30/12/2021, 06/09/2019, 24/10/2016 y 11/09/2015 cumpliendo con todas las previsiones de ley, aplicándose el apercibimiento dispuesto en el art. 22 CPL, y a efectos de que conteste el traslado de la caducidad interpuesta, frente a lo cual guardó silencio.

Remitidos los autos al Sr. Agente Fiscal de la IIª Nominación, se expidió a favor de la caducidad planteada.

CONSIDERANDO:

1. Encontrándose el presente en estado de resolver, es dable aclarar que el instituto de la perención presupone la existencia de tres condiciones: una instancia abierta -sea principal o incidental-; inactividad procesal absoluta o jurídicamente irrelevante y el transcurso de los plazos de inactividad establecidas por la ley.

En ese marco, abierta la instancia -la que se opera con la interposición de la demanda-, pesa sobre la parte actora la carga de instar el proceso, deber-obligación que solo cesa por razones de fuerza mayor o causas graves discrecionalmente

apreciadas que impidan la realización de actos por la parte accionante y su omisión en el impulso.

La caducidad de instancia prevista en el art. 40 del CPL es un instituto de orden público que tiene por finalidad terminar un proceso impidiendo que se extienda en el tiempo sin limitación alguna y su consiguiente perjuicio para las partes involucradas y la comunidad.

La ley presume que quien ha paralizado la instancia comenzada durante los plazos establecidos legalmente, no le interesa continuar y renuncia a ella debiéndose expedir el órgano jurisdiccional a fin de efectivizar el derecho de la contraparte al cese de la incertidumbre de una instancia abierta por un juicio en su contra.

Debe haber transcurrido el plazo de un año (art.40 inc.1º CPL) sin que el actor haya realizado actos impulsorios del proceso, teniendo en cuenta el modo de contar los plazos en el derecho -establecido por el art. 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, esto es de fecha a fecha, -y que el art. 203 del CPCC, establece que en el cómputo de los plazos se contarán los días inhábiles, con excepción de aquellos que correspondan a las ferias judiciales.

Ahora bien, examinadas las actuaciones cumplidas en el expediente, a la luz de las tres condiciones del instituto de la perención, cabe sostener que existe una instancia abierta. Por ello se examinará si hubo durante el proceso, inactividad procesal absoluta o jurídicamente irrelevante y si, en caso de inactividad, la misma fue dentro de los plazos establecidos por la ley para que opere el instituto de caducidad de instancia.

La compulsa de estas actuaciones, demuestra que, según lo manifestado por la demandada, el día 26/06/2014 se dispuso el traslado a las partes del informe pericial presentado por el perito médico, notificación que se efectivizó mediante cedula en los casilleros de los letrados apoderados el día 25/07/2014.

Desde ese momento, la parte actora no efectuó ningún acto valido para interrumpir el transcurso del plazo de caducidad, ya que el escrito del letrado Roque José Agustín Tello de fecha 27/03/2015, por el que comunicaba la renuncia al patrocinio del actor, no significo la suspensión de los plazos procesales, conforme se dispuso en decreto de fecha 08/04/2015.

Por ello, y pese a las diversas diligencias producidas para lograr que el actor continúe ejerciendo sus derechos, no compareció con nuevo letrado.

En efecto, el 08/04/2015 se dispuso que se notifique al actor a fin de que, en el término de cinco días, lo que no llego a materializarse, por lo que se ordenó el 30/10/15, una nueva notificación, la que fue efectivizada el 21/12/2015, conforme constancias de autos (f. 386). Por ello, ante la incomparecencia de la actora con

nuevo patrocinio, el 24/10/2016 se dispuso hacer efectivo el apercibimiento y notificar las sucesivas providencias en los estrados del juzgado.

Finalmente, en fechas 30/08/2019 y 13/11/19 el letrado Pedro Sánchez solicitó que pasen los autos a despacho para resolver la caducidad de instancia planteada, para lo que se dispuso que previamente se adjunte copia del escrito de interposición de incidente a fin de notificar a la actora, lo que fue cumplido el 15/02/2022, por lo que ahora se encuentra bajo estudio.

2. Cumplido el repaso de las actuaciones de la causa, debe tenerse en cuenta que doctrina y jurisprudencia han señalado en forma reiterada que las actuaciones que instan el procedimiento son aquellas que lo hacen avanzar hacia la sentencia, es decir, son las que tiene por objeto pedir, realizar urgir justamente acto diligencia o diligencia que corresponda al estado del juicio con idoneidad específica para hacer avanzar el mismo (Cf.: Loutayf Ranea -Ovejero López "Caducidad de Instancia", cap. III, N31, acápite "A", Alsina "Tratado...", T IV, p.459; SentisMelendo "Perención de Instancia y Carga Procesal", en Estudios de Derecho Procesal, T I, p. 321, N III; Parry "Perención de la Instancia" p.369/379; Courture "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", p. 172/174). En igual sentido se pronunció en reiteradas oportunidades la Corte Suprema Local, como, por ejemplo, en los autos "Mentz Julio Ernesto y otros vs. Ñuñorco SA y otros s/ cobros" (sent. N° 773 del 25/09/2001).

En efecto, como se describió, el último acto impulsorio en los presentes autos fue el decreto de fecha 26/06/14 que dispuso el traslado a las partes del informe pericial, el que se hizo efectivo, a través del libramiento de las cédulas en fecha 25/07/2014.

Desde ese momento hasta el día de la fecha, la parte actora no efectuó presentación alguna que haga impulsar el proceso, y no constan en autos los motivos por los cuales no pudo hacer avanzar el proceso con actos correspondientes a la etapa en la que se encontraba, desde el 25/07/2014 hasta el 07/09/2015, fecha en la que se interpuso la caducidad de instancia.

Por otro lado, el escrito mediante el cual el Dr. Tello renunció al mandato no implica acto impulsorio, por el contrario, lejos de impulsarlo el apoderado renunció.

En dicha oportunidad (decreto del 08/04/15) se ordenó la citación de la parte actora con nuevo patrocinio letrado y se le hizo saber al letrado renunciante que continuaba ejerciendo su representación hasta el vencimiento del plazo antes fijado o el apersonamiento del actor con nuevo patrocinio y/o representación letrada. Dicha notificación a domicilio real se efectuó en fecha 21/12/2015, según consta a f. 386 vta.

Cabe destacar, que, aun cuando el letrado Tello comunicó su renuncia, dicho acto no suspendió la tramitación de la causa –tal como se describió en el decreto antes mencionado-, y si se le otorgó un plazo al actor para que se apersona con nuevo letrado bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía (conf. art. 68 CPCC).

En ese sentido se expidió la CSJT: *“La renuncia no suspende la tramitación de la causa desde que el o los renunciantes continúan en el desempeño de la representación conferida hasta que venza el plazo fijado por el juez al poderdante para reemplazarlo/s o comparecer por sí (conf. art. 53, inc. 2º, del Cód. Proc.; Carlos E. Fenochietto, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, t. 1, p. 235, Astrea, 1999; Elena I. Highton y Beatriz A. Aréan, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial, t. 1, p. 878)”* (cfr. Arazí, Roland y Rojas, Jorge A.: *“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T. I, pág. 310*). Concordantemente, a propósito de la norma del artículo 68, segunda parte, del CPCC de Tucumán, similar al inciso 2º del artículo 53 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se ha expresado: *“Al mandatario no se le puede exigir la continuidad en la representación judicial que ejerce, más allá del deber implícito en las normas de ética profesional, por lo tanto, puede renunciar al poder conferido, debiendo notificarse al mandante por cédula, en su domicilio real. Mientras transcurre el plazo que se otorgue para la sustitución del mandato, el apoderado deberá continuar sus gestiones propias de la defensa, hasta que haya vencido el mismo, no pudiendo abandonar ni dejar de cumplir con las obligaciones propias de su cargo, entre ellas, la de apelar de la sentencia desfavorable a los intereses de aquél. Este plazo deberá computarse desde la fecha en que el mandante quede debidamente notificado, encontrándose a cargo los renunciantes las diligencias tendientes al cumplimiento de la notificación”* (cfr. Directores: Marcelo Bourguignon-Juan Carlos Peral: *“Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán”, T. I-A, págs. 291/292*). (CSJT, sentencia N° 2099 del 11/11/2019, en autos “Cekada Patricia Katia vs. Colegio de Abogados de Tucumán s/ Recurso de Apelación”).

Por todo lo manifestado, si tenemos en cuenta el modo de contar los plazos en el derecho -establecido por el art. 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, esto es de fecha a fecha, desde el 25/07/2014 (fecha en que se libraron cédulas) al 07/09/2015 (fecha de interposición de la caducidad por la demandada), transcurrió con creces el plazo legal para el cómputo, aun cuando el art. 203 del CPCC establece que no se contarán los días inhábiles correspondientes a las ferias judiciales -en autos, las de enero y julio de 2015, por lo que se puede concluir que la

caducidad se produjo el día 03/09/2015, por lo que la fecha de presentación del escrito de la demandada, la instancia se encontraba perimida, habiendo transcurrido el plazo de un año previsto en el art. 40 inciso 1 CPL.

COSTAS: Atento a las cuestiones consideradas, se imponen a la actora las correspondientes a los autos principales y las del incidente de caducidad interpuesto por la demandada (art. 105 CPCC supletorio conforme art. 49 CPL).

HONORARIOS:

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46 inc. 2 del CPL.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la misma es de aplicación el art. 50 inc. 2º de la citada normativa, por lo que se toma como base regulatoria el 30% del monto reclamado en la demanda actualizado desde el 05/11/2009 (fecha de interposición de la demanda) al 28/06/2022, con tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos comerciales (cfr. “Olivares, Roberto Domingo vs. Michavila, Carlos Arnaldo y otro s/ daños y perjuicios”, sent. nro. 937 del 23/09/2014; “Fernández, Ramón Antonio vs. Castro, Héctor Agustín s/ daños y perjuicios”, sent. nro. 795 del 06/08/2015; “Porcel Fanny Elizabeth vs. La Luguenze S.R.L. s/ Despido”, sent. nro. 1267 del 17/12/2014; “Gregoire, Mabel del Valle vs. Acosta Silvia María s/ Cobro de pesos”, sent. nro. 1277 del 22/12/2014; “Zurita Graciela Norma vs. Citytech S.A. s/ Cobro de pesos”, sent. nro. 324 del 15/04/2015; entre otras). Los cálculos efectuados arrojan la suma de \$105.493,79.

Teniendo presente la base regulatoria, el monto reclamado, las cuestiones debatidas en el proceso, la actividad procesal, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales intervinientes, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 14, 15, 38, 42, 43 y 59 de la Ley N° 5480 (en adelante LH) y 50 del CPL y demás pautas impuestas por la Ley N° 24432 ratificada por la Ley Provincial N° 6715, y además en virtud de lo establecido por el art. 38 último párrafo de la Ley N° 5480.

a) Al letrado Roque José Agustín Tello: por su actuación en una etapa del proceso con más el 55% por su actuación en el doble carácter, totaliza la suma de \$3.270,31 [(base x 6% (art. 38 LH) + 55% (art 14 LH) ÷ 3 x 1(cantidad de etapas del proceso)].

Teniendo en cuenta que el monto calculado es inferior al tope mínimo establecido en el art. 38 LH, se regulan sus honorarios en la suma de \$50.000 (pesos cincuenta mil) con más el 55% por su actuación en el doble carácter, lo que totaliza la suma de \$77.500 (pesos sesenta y siete mil quinientos).

b) Al letrado Juan Facundo Masaguer, por su actuación en una etapa del proceso con más el 55% por su actuación en el doble carácter, totaliza la suma de \$5.995,56 [base x 11% (art 38 LH) + 55% (art 14 LH) ÷ 3 x 1 (cantidad de etapas del proceso)].

Teniendo en cuenta que el monto calculado es inferior al tope mínimo establecido en el art. 38 LH, se regulan sus honorarios en la suma de \$50.000 (pesos cincuenta mil) con más el 55% por su actuación en el doble carácter, lo que totaliza la suma de \$77.500 (pesos sesenta y siete mil quinientos). Por el incidente de caducidad aquí resuelto, en el que participó solamente con su planteo, la suma de \$1.226,37 [base x 15% (art 38 LH) x 30% (art. 59 LH) + 55% ÷ 3 (art. 42 LH y cfr. CSJTuc., “Banco Macro S.A. vs. Sanatorio Modelo S.A. s/ Ejecución hipotecaria”, sent. N° 1050 del 01/08/2018) ÷ 2 (art. 43 LH)].

c) Al letrado Pedro Sánchez, en su carácter de apoderado de la demandada por su actuación en esta incidencia de caducidad, en la que participó instando el traslado del planteo y control de la etapa de responde y resolución, la suma de \$899,33 [base x 11% (art 38 LH) x 30% (art. 59 LH) + 55% ÷ 3 (art. 42 LH y cfr. CSJTuc., “Banco Macro S.A. vs. Sanatorio Modelo S.A. s/ Ejecución hipotecaria”, sent. N° 1050 del 01/08/2018) ÷ 2 (art. 43 LH)].

RESUELVO:

I) ADMITIR el incidente deducido por la demandada CAJA POPULAR DE AHORROS DE TUCUMAN en los términos del art. 40 inc. 1º CPL, y en su mérito, **DECLÁRASE LA CADUCIDAD DE INSTANCIA** en los presentes autos, de acuerdo a lo considerado.

II) COSTAS: como se consideran.

III) REGULAR HONORARIOS: **1)** Al letrado Roque José Agustín Tello, apoderado de la actora, por su actuación en el expediente principal la suma de \$77.500. **2)** Al letrado Juan Facundo Masaguer, apoderado de la demandada por su actuación en el expediente principal en la suma de \$77.500, y por el incidente de caducidad la suma de \$1.226,37, conforme a lo considerado. **3)** Al letrado Pedro Sánchez, apoderado de la demandada por su actuación en el incidente de caducidad la suma de \$ 899,33, conforme a lo considerado.

IV) EJECUTORIADA que sea la presente, practíquese por Secretaría Actuarial planilla fiscal acorde al modo de conclusión de la litis.

V) COMUNÍQUESE a la Caja de Previsión para Abogados y Procuradores.

REGÍSTRESE, ARCHÍVESE Y HÁGASE SABER._{MC}

NRO.SENT: 427 - FECHA SENT: 29/06/2022

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=TOSCANO Leonardo Andres, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20273642707, Fecha:29/06/2022;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>